



Título del Trabajo:

EL CONFLICTO COLOMBIANO 'PUERTAS ADENTRO':
SIMBIOSIS ENTRE LO HISTÓRICO Y LO RECIENTE

Autor:

Nora Marisol Yakimiuk

Ponencia presentada en el

II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

11 y 12 de noviembre de 2004

PRESENTACIÓN¹

En Colombia, los intentos fallidos de resolución del conflicto por el que atraviesa el país, a lo largo de cuatro décadas, dan como resultado una situación de violencia generalizada que involucra a todos y cada uno de los diferentes actores de la realidad colombiana. Así, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (militares y policía), las unidades paramilitares derechistas (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC), las asociaciones guerrilleras (entre las que se destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y el Ejército de Liberación Nacional –ELN), o los carteles de narcotraficantes y su entorno armado, el recurso a la violencia constituye *“un medio del que cualquiera puede valerse para imponer sus intereses con las finalidades que sean.”*²

De esta forma, la violencia adquiere un *rasgo cotidiano*, al punto de convertirse *“en un modo de funcionamiento de la sociedad.”*³ Se plantea, entonces, una complementariedad entre el orden y la violencia, en la medida que el terror –tanto como su amenaza– ocupa el lugar del orden. Esto evidencia una situación paradójica por la que atraviesa el Estado colombiano: mientras reivindica la preeminencia del Estado de derecho y los procedimientos democráticos en el país, los hechos evidencian severas falencias respecto a su capacidad de acción para avanzar en la resolución del conflicto interno, combinando, en consecuencia, la *devoción jurídica* con la *aprobación de la violencia*. A partir de ello, y paralelo a la expansión y proliferación de actores armados, la *estrategia del terror* logra arraigarse no sólo como intento de control de la población civil sino, además, como el método *por excelencia* para llevar a cabo la confrontación mutua.

En consecuencia, el *dilema de seguridad* se hace presente: cada parte interviniente en el conflicto centra sus esfuerzos en el objetivo de incrementar su propia seguridad reduciendo, como contrapartida y al mismo tiempo, la seguridad del resto de los actores. Así, bajo el *dilema de seguridad*, el comportamiento de los actores resulta moldeado no sólo por la situación estratégica, sino además, por las percepciones particulares que estos actores tienen respecto de tal situación, por un lado, y sus expectativas en cuanto al comportamiento de los otros participantes de la situación en cuestión se refiere, por otro.⁴ Producto, entonces, de que *“las diversas partes en conflicto comparten el mismo objetivo de sembrar ‘miedo y odio’, actúan*

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la I Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, *Desarrollo y Seguridad Internacional*, Florianópolis, Brasil, 13 al 16 de mayo de 2004.

² Waldmann, Peter, *El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina*, Nueva Sociedad, Venezuela, 2003, p. 159.

³ Pecaute, Daniel, *Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia*, *Desarrollo Económico*, vol. 36, n° 144, enero-marzo 1997, p. 891.

⁴ Snyder, Jack & Jervis, Robert, *Civil war and the security dilemma*, en Walter, Barbara & Snyder, Jack (eds.), *Civil war, insecurity and intervention*, Columbia University Press, New York, 1999, ps. 15-16.

de tal manera que se refuerzan unas a otras y se ayudan entre sí a crear un clima de inseguridad y sospecha."⁵

Tienen lugar, entonces, rasgos de lo que Mary Kaldor denomina las *nuevas guerras*, definidas como una mezcla de guerra (concebida como la violencia por motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (en el que la violencia, ejercida por grupos organizados privados, se hace presente por motivos particulares –asociada, generalmente, al beneficio económico) y, violaciones masivas a los derechos humanos (que implican la violencia contra personas individuales ejercida por Estados o grupos organizados políticamente).⁶

En el marco de la actual era de globalización, cristalizada en una realidad signada por *"desórdenes e incertidumbre respecto a la convivencia en el sistema mundial,"*⁷ estas *nuevas guerras* se dan en un contexto de erosión del monopolio de la violencia legítima. Esto implica que *"la preeminencia de los Estados como sistema político de organización de la vida social está sometida a una serie de fuerzas corrosivas que están transformando y redefiniendo la capacidad y la competencia."*⁸

En este sentido, la *privatización de la violencia* resulta crucial para abordar tal erosión del monopolio estatal de la fuerza física. Al respecto, Kaldor argumenta que *"las nuevas guerras surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia, la violencia está cada vez más privatizada, como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo."*⁹

Paralela a esta erosión de la autonomía del Estado –que plantea severos cuestionamientos respecto a la cuestión de la soberanía– la realidad de estas *nuevas guerras* plantea un *modus operandi particular*: hacerse del territorio a través del *control* de la población sembrando, en consecuencia, el *miedo* y el *odio*. De ahí que se apunte a controlar a la población recurriendo a su expulsión *"mediante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y económicas de intimidación. Ésa es la razón de que en todas estas guerras haya habido un aumento espectacular del número de refugiados y personas desplazadas, y de que la mayor parte de la violencia esté dirigida contra civiles."*¹⁰

⁵ Kaldor, Mary, *Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global*, Tusquets Editores, Barcelona, p.25.

⁶ Kaldor, *op. cit.*, p.16.

⁷ Attinà, Fulvio, *El sistema político global. Introducción a la Relaciones Internacionales*, Paidós, Barcelona, 2001, p. 191.

⁸ Attinà, *op. cit.*, p. 157.

⁹ Kaldor, *Las nuevas guerras*, p. 20.

¹⁰ Kaldor, *op. cit.*, p. 23.

Si bien, a grandes rasgos, ciertos elementos de las denominadas *nuevas guerras* parecen estar presentes en la realidad colombiana, cabe preguntarse hasta qué punto aplica este concepto para la descripción de un conflicto interno que lleva décadas sin resolución. Por un lado, la cuestión de la *debilidad estatal* respecto al ejercicio efectivo del monopolio del uso de la fuerza. La dificultad asociada al ejercicio de la presencia estatal efectiva en la totalidad del territorio colombiano resulta recurrente a lo largo de su historia, de ahí que pueda hacerse referencia a una *debilidad crónica del Estado colombiano*. No obstante, esta situación se agravó durante los últimos años al compás de la problemática del narcotráfico como realidad instalada en Colombia. De hecho, se estima que, en la actualidad, el Estado colombiano retiene un control efectivo cercano al 25% de su territorio.¹¹

Por otro lado, el *modus operandi* de los distintos actores armados que, a partir de la adhesión a la *estrategia de terror*, apuntan al control de la población de los territorios en disputa. Desde esta perspectiva, resulta innegable la presencia de ciertos elementos de las *nuevas guerras* a las que hace referencia Kaldor. Si bien la violencia constituye un rasgo recurrente de la realidad colombiana –fundamentalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX– durante la última década la problemática se agravó paralelo a la irrupción del narcotráfico en el país. Los desplazamientos migratorios y de refugiados en Colombia, provocados por la violencia de la narco-guerrilla¹², dan cuenta de este *estallido de la violencia* como realidad instalada, en la que se privilegia el instrumento del *terror* para mantener en vilo a vastos sectores de la población.

A partir de ello, en Colombia, la conjunción del tráfico de drogas, el crimen organizado y un conflicto interno no resuelto da como resultado un complejo escenario signado por la *cotidianidad de la violencia*. Esto sintetiza elementos de larga data –presentes tanto en la *convivencia violenta* de los distintos actores político-sociales por la que atravesara la sociedad colombiana a lo largo de su historia, como en la *debilidad crónica* del Estado– con otros de carácter más reciente –que encuentran en el narcotráfico su disparador principal.

El presente trabajo apunta, entonces, al **análisis de este complejo escenario de la realidad colombiana**, abordando el conflicto interno a partir de esta **doble dinámica de lo histórico y lo reciente**, cuya conjunción se refleja en una situación de *violencia generalizada* que se asume como *cotidiana*. En este marco, la identificación de los actores involucrados resulta fundamental. Tal cuestión se aborda en la primera sección, que partiendo de la consideración de los distintos actores armados que protagonizan el conflicto interno colombiano, se centra luego en el

¹¹ Aunque cabe destacar que se estima que en esta porción del territorio, en el que el Estado ejerce el monopolio de la coacción, se concentra casi el 80% de la población. Wolf Grabendorff, UTDT, 10/11/2003.

¹² Se estima que entre 1997 y 2001, estos desplazamientos afectaron, aproximadamente, a 1.5 de personas. Ver Mónica Hirst, *Seguridad regional en las Américas*, Mimeo, Bs. As., 2003, p. 34.

complejo proceso de interacción estratégica en el que resultan inmersos. En la segunda parte, se analiza la responsabilidad del Estado frente a este escenario de *violencia generalizada*, con eje en la cuestión de su *debilidad crónica*. En la tercera parte se desarrolla la cuestión de la violencia que, más allá de resultar un rasgo recurrente a lo largo de la historia colombiana, cobra nuevas dimensiones a partir de la introducción del narcotráfico en la economía y la sociedad colombianas. Finalmente, las conclusiones.

LOS ACTORES ARMADOS INVOLUCRADOS

Tras más de cuatro décadas de conflicto interno, un complejo escenario – sintetizado en la *cotidianidad de la violencia*– signa la realidad colombiana. La identificación de los actores armados que intervienen resulta, entonces, en el punto de partida para abordar el análisis de esta situación de *violencia generalizada* por la que atraviesa el país.

• La guerrilla

Surgidas en el contexto de las luchas campesinas de los años '20s y '30s del siglo XX, el proceso de crecimiento de las guerrillas a lo largo de las décadas resulta innegable. Hacia los '80s, esto se cristaliza en el auge político y social que adquieren las asociaciones guerrilleras en amplias zonas del país. Paralelo a este auge, y a través de los años, se producen cambios respecto a sus objetivos y a sus estrategias en materia de acción. Al respecto, Tokatlián argumenta que tanto las FARC como el ELN van dejando las áreas marginales para proyectarse en las zonas más ricas en recursos naturales (entre ellos, cultivos ilícitos, petróleo y esmeraldas). A su vez, aumentan considerablemente su capacidad de reclutamiento y poder de fuego a través de los grandes ingresos provenientes de los impuestos sobre cultivadores de plantaciones ilícitas, los secuestros y las extorsiones a empresas tanto nacionales como extranjeras. A esto no escapa la pérdida de su *ethos* revolucionario al entrar en contacto con el narcotráfico, dando cuenta que *“la insurgencia colombiana dejó de ser paupérrima y rural y se fue consolidando materialmente y en términos de su proyección urbana.”*¹³

Así, a través del tiempo, estas asociaciones guerrilleras van cobrando relevancia y poder en la realidad político-social colombiana. En la actualidad, se estima que las FARC cuentan con un total de 17000 efectivos. A partir de su alianza con los traficantes de drogas, sus actividades se han extendido sobre más de la mitad del territorio nacional. En cuanto a la logística, este grupo guerrillero cuenta con una fuerte base rural y una importante presencia urbana en una miríada de ciudades en el país. Por su parte, las fuerzas del ELN, que suman aproximadamente 7000, representan los

¹³ Tokatlián, Juan G., *Colombia: un caso de globalización defectiva*, en Tokatlián, Juan G., Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia, Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2000, ps. 41-42.

combatientes más ideológicamente motivados, comprometidos con un marco de pensamiento marxista.¹⁴

Más allá de esta relevancia que adquieren estos grupos guerrilleros en cuanto a la magnitud de su presencia armada, debe atenderse además, al cambio que se produjera en el contexto del conflicto a partir de la década del '90. En este sentido, Vargas Meza señala el fenómeno del narcotráfico y sus efectos en la política; la intervención internacional a partir del argumento de *guerra a las drogas*, propulsado por Estados Unidos; los nuevos modelos de inserción de la guerrilla en los ámbitos locales caracterizados por la acumulación económica para la guerra y; la sustitución del proyecto político de la insurgencia por generalidades programáticas vinculadas a la aplicación de la *guerra sucia*, por un lado, y la práctica del secuestro y la extorsión, por otro.¹⁵

De esta forma, la presencia de asociaciones guerrilleras resulta vinculada a altos costos asumidos por la sociedad colombiana en su conjunto. No obstante, la responsabilidad de los mismos se extiende a la presencia de otros actores armados que conviven con la insurgencia: los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado. Esto se desarrolla a continuación.

• Los paramilitares

Según Vargas Meza, el paramilitarismo en Colombia resulta en *“una respuesta armada inscrita en su origen en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de carácter ilegal, profundamente enraizada con poderes económicos regionales de orden legal o ilegal y que coincide o se motiva en modelos contrainsurgentes.”*¹⁶ De esta forma, continúa el mencionado autor, *“la violencia parainstitucional garantiza, complementa y transforma los mecanismos que posibilitan la estructuración de un patrón de sociedad que se afirma en los poderosos omnímodos privados cuando el Estado se convierte en un obstáculo o se reconocen limitaciones en las funciones de garante de los procesos violentos de acumulación.”*¹⁷

Bajo esta lógica, en los '90s se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– que, a partir del apoyo tácito de un segmento de oficiales militares, centraron su objetivo en el combate a las guerrillas en pos de la defensa de la propiedad privada –fundamentalmente, la de los grandes terratenientes. Vinculada al financiamiento del narcotráfico, la expansión de estas milicias paramilitares derechistas por el territorio colombiano –actualmente, las fuerzas de las AUC suman aproximadamente 10000

¹⁴ Ver Mónica Hirst, *Seguridad regional en las Américas*, p. 34.

¹⁵ Vargas Meza, Ricardo, *Drogas, máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia*, TM Editores, Bogotá, 1999, ps. 44-45.

¹⁶ Vargas Meza, *op. cit.* p. 37.

¹⁷ Vargas Meza, *ibid.*, p. 37.

efectivos¹⁸– condujo a cierta *mutación* respecto a sus objetivos y un recrudescimiento en cuanto a sus estrategias de acción –elementos compartidos por el accionar de los grupos guerrilleros, considerados anteriormente. En este sentido, Tokatlián señala que *“el paramilitarismo, nacido de las entrañas del mismo Estado, con el beneplácito de militares, terratenientes, empresarios y políticos, y cuyo objetivo ha dejado de ser la contención de la guerrilla para transformarse en la búsqueda de la reversión de la influencia insurgente, se ha convertido en un gran aparato de terror contra la población civil inerme.”*¹⁹

• Las fuerzas de seguridad del Estado: los militares y la policía

Un contexto signado por la preeminencia de actores armados al margen de la legalidad (como los movimientos guerrilleros y las unidades paramilitares derechistas), que difieren en la definición de sus objetivos pero que se asemejan en su accionar –vía adhesión a la *estrategia de terror*– plantea severos interrogantes respecto al manejo soberano del espacio territorial. En este sentido, resulta innegable el cuestionamiento respecto al rol asumido por las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras la percepción militar del conflicto interno hace hincapié en la influencia que tiene el narcotráfico en la guerrilla –generando una pérdida de espacio y condiciones desfavorables al ejército colombiano²⁰– la realidad signada por los distintos intentos fallidos de resolución del conflicto da cuenta de las severas falencias a las que se enfrentan las fuerzas de seguridad para hacer frente al accionar violento de los grupos armados que funcionan al margen de la ley. De hecho, *“en conjunto, la guerrilla y el paramilitarismo controlan más territorio que los cuerpos de seguridad. Tantos años de conflicto han terminado por debilitar y corroer a las fuerzas armadas.”*²¹ A partir de ello, las críticas a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado enfatizan no sólo la cuestión de la violación masiva de los derechos humanos, sino además su ineficacia operativa.

En principio, esta situación refleja una problemática mayor, con eje en la débil construcción de legitimidad estatal y la dificultad para imponer el monopolio de la coacción física. No obstante, a pesar de la debilidad en el accionar de las fuerzas armadas, éstas no resultan exentas de cuestionamientos respecto a su vinculación con el narcotráfico –eje de la expansión de la guerrilla y los paramilitares, y que *se supone* las fuerzas de seguridad estatales *deben* combatir. Respecto de esta relación entre corrupción, drogas y organismos de seguridad, Vargas Meza distingue dos

¹⁸ Hirst, Monica, *Seguridad regional en las Américas*, p. 34.

¹⁹ Tokatlián, Juan G., *Colombia: un caso de globalización defectiva*, en *Globalización, narcotráfico y violencia*, p. 42.

²⁰ Vargas Meza, Ricardo, *Drogas, máscaras y juegos*, p. 6.

²¹ Tokatlián, Juan G., *Colombia: un caso de globalización defectiva*, en *Globalización, narcotráfico y violencia*, p. 43.

situaciones específicas: por un lado, las acusaciones en las cuales se señala a militares y policías colombianos de estar comprometidos en relaciones directas con narcotraficantes (casos de corrupción frente al narcotráfico); por otro, casos en los que se acusa a los militares de estar vinculados directamente con el tráfico de drogas (a través de la tolerancia o apoyo de grupos paramilitares financiados por narcos activos o ex narcotraficantes).²²

Tal situación da cuenta del narcotráfico como realidad instalada en Colombia, fundamentalmente a partir de la década del '90, a través del cual se articulan las interrelaciones entre los distintos actores armados que intervienen en el conflicto interno colombiano. Según Pecaut, fueron los progresos de la economía de la droga los que vinieron a confundir todas las separaciones tajantes, tendiendo a las *interferencias entre los protagonistas* dado que *"pusieron a su disposición recursos desconocidos hasta ese momento, provocaron nuevos efectos sobre el conjunto del funcionamiento de la sociedad y de las instituciones"*²³ Producto de este nuevo contexto, entonces, estas interrelaciones adquieren un carácter *complejo* en la medida que involucra *"situaciones de anomia y violencia con altos costos sociales, económicos y ambientales que se suman a los costos en vidas y derechos humanos típicos de una guerra crecientemente degradada."*²⁴ El análisis de las características que asume este complejo proceso de interacción estratégica se desarrolla a continuación.

• La interrelación estratégica de actores

Producto de las complejas situaciones de anomia y violencia que genera la confrontación de los distintos actores armados en pos de alcanzar sus objetivos diferenciados, se dificulta la materialización de los mismos. En el caso de las guerrillas, esto se cristaliza en la dificultad a la que se enfrentan a la hora de la consolidación de las relaciones legítimas de poder, resultando su predominio en el producto de las ganancias pragmáticas ajenas a dinámicas sostenibles en el contexto socioeconómico o ético-cultural. Por su parte, los paramilitares adhieren a una violencia terrorista y desordenadora de los equilibrios existentes a escala regional; operando, en consecuencia, como mecanismo de expropiación violenta de los campesinos, por un lado, y como protección a circuitos ilegales, por el otro. Mientras tanto, la policía antinarcóticos no logra evitar el crecimiento de las áreas de ilícitos, que responde fundamentalmente a las demandas de un mercado internacional en ascenso. A su vez, las fuerzas armadas no logran con su accionar la legitimación ni la credibilidad del Estado en las zonas de conflicto.²⁵

²² Ver Vargas Meza, Ricardo, *Drogas, máscaras y juegos*, ps. 13-18.

²³ Pecaut, Daniel, *Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia*, p. 906.

²⁴ Vargas Meza, Ricardo, *Drogas, máscaras y juegos*, p. 169.

²⁵ Vargas Meza, Ricardo, *op. cit.*, ps. 169-170.

Como consecuencia, los distintos actores armados resultan expuestos a múltiples efectos que provienen de su interacción, sin que resulte posible el predominio de uno sobre otro de manera tajante. Tiene lugar, entonces, un **complejo proceso de interacción** entre estos grupos, en el que *"cooperación y enfrentamiento, colusión y defensa de intereses particulares, transacciones y lucha a muerte, van a la par."*²⁶

La particularidad de este proceso de interacción reside en que resulta signado tanto por la existencia de asimetrías en los fines, como por la de ciertas simetrías respecto a los medios. Al respecto González, Bolívar & Vázquez argumentan que *"la dinámica del conflicto armado interno, la persistencia y expansión del fenómeno guerrillero y la primacía que han tomado los paramilitares en la lucha contra la guerrilla, implicaron en la década de los '90s un proceso de interacción de los dos grupos, en el cual terminaron por asemejarse, a pesar de sí mismos y de sus diametralmente opuestas orientaciones ideológicas."*²⁷ Una dinámica de tales características asume un carácter *negativo*, ya que cada nuevo hecho de violencia por parte de uno de los actores armados conduce a una reacción semejante en el bando contrario. Se hace presente, en consecuencia, un *juego de espejos* en el cual las acciones violentas de uno reflejan y retroalimentan las del otro, y viceversa.²⁸

De esta forma, el **dilema de seguridad** entra en escena. A partir de ello, las estrategias se moldean a la luz de las percepciones particulares respecto a la situación, retroalimentando un constante *clima de inseguridad y sospecha*. De ahí que el objetivo de *sembrar miedo y odio* resulte en el *bien común* al que adhieren los distintos actores participantes del conflicto.

Así, este particular *juego de espejos* se cristaliza en la adhesión de la *estrategia del terror* por parte de todos y cada uno de los actores armados que intervienen en el conflicto, para mantener la *lealtad* de la población de los territorios que tienen bajo su control –sin que ello implique, no obstante, la posibilidad de garantizar su protección de manera permanente. Más allá de que esta situación deja expuesta a la población a sufrir represalias de la contraparte, en ciertas ocasiones, la población civil de las áreas en disputa no sabe a qué atenerse ni a quién obedecer, ya que los actores armados pueden cambiar de bando una y otra vez. De ahí que según González, Bolívar & Vázquez, pueda caracterizarse al conflicto colombiano como una *guerra por tercero interpuesto*, en el que los adversarios no se enfrentan directamente entre sí sino que *golpean* a las bases sociales –reales o supuestas– del enemigo.²⁹

²⁶ Pécaut, Daniel, *Guerra contra la sociedad*, Espasa, Bogotá, 2001, p. 181.

²⁷ González, Fernán E., Bolívar, Ingrid J. & Vázquez, Teófilo, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Cinep, Colombia, 2003, p.71.

²⁸ González, Bolívar & Vázquez, *op.cit.*, p.46.

²⁹ González, Bolívar & Vázquez, *ibid.*, p. 211.

Esto se manifiesta no sólo en la práctica del secuestro por parte de paramilitares y guerrilleros, sino además en las retenciones masivas e individuales como actos previos a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o masacres, a las que suelen recurrir los grupos militares. Las violaciones masivas a los derechos humanos se hacen presentes en su máxima expresión, y con ello una dimensión indiscutida del carácter de las denominadas *nuevas guerras* a las que hace referencia Mary Kaldor –y que se presentara en la introducción del presente trabajo.

Llegados a este punto, vale preguntarse por la responsabilidad del Estado respecto de este complejo escenario que, sintetizado en la *cotidianidad de la violencia* y tras más de cuatro décadas de conflicto interno, signa la realidad colombiana. En este sentido, la dificultad asociada al ejercicio de la presencia estatal efectiva en la totalidad del territorio colombiano resulta innegable. Tal es la cuestión que se aborda en la próxima sección.

LA DEBILIDAD CRÓNICA DEL ESTADO

En Colombia, la dificultad asociada al ejercicio efectivo del monopolio del uso de la fuerza en la totalidad del territorio resulta recurrente a lo largo de su historia, de ahí que pueda hacerse referencia a una *debilidad crónica del Estado*. De hecho, como argumenta Waldmann, nunca le fue cedido al Estado el exclusivo monopolio de la fuerza física, dado que las elites políticas nunca lo pretendieron seriamente.³⁰ Se hace presente, entonces, el *carácter socialmente construido* del monopolio estatal de la fuerza, que “no corresponde a una esencia abstracta del Estado sino a procesos sociales ligados a la interrelación entre los grupos sociales que habitan el mismo territorio.”³¹

De esta forma, el Estado colombiano enfrenta severos límites en su accionar tanto en el aspecto geográfico como en el funcional. La *debilidad estatal* se manifiesta así, no sólo en su incapacidad de ejercer el control del territorio nacional, sino además, en la dificultad respecto a la provisión de un sistema policial, legal y judicial tendiente a la protección de los derechos de propiedad, por un lado, y la canalización de los conflictos, por otro.

Bajo este marco de *debilidad crónica*, el Estado colombiano no escapa a una situación paradójica: si bien reivindica la preeminencia del Estado de derecho y los procedimientos democráticos en el país, resulta incapaz de garantizar mecanismos vinculados a la canalización y resolución de los conflictos que moldean la realidad político-social colombiana desde hace cuatro décadas.

A partir de estas severas falencias respecto a la capacidad del Estado colombiano de asumir responsabilidades acordes al conflicto interno, pueden señalarse ciertos elementos característicos del *Estado anómico* –un Estado

³⁰ Waldmann, Peter, *El Estado anómico*, p. 170.

³¹ González, Bolívar & Vázquez, *Violencia política en Colombia*, p. 12.

que, según criterios de lo que debería ser su buen funcionamiento, no sólo presenta ciertas carencias y debilidades, sino que prácticamente invierte parte de estos criterios— al que hace referencia Waldmann. Por un lado, el Estado no brinda a sus ciudadanos un marco de orden para su comportamiento en el ámbito público, constituyendo más bien una fuente de *desorden*. Por otro, esta situación se debe a la pretensión estatal de regular ámbitos sociales y modos de comportamiento que sólo ocupa en forma ficticia, sin estar en condiciones de dominar y controlar efectivamente. De ahí que *“la debilidad de los órganos estatales para imponer sus reivindicaciones invita a los grupos sociales que rivalizan a ocupar dichos espacios y ámbitos. De manera que el ciudadano no sabe las reglas de quién debe cumplir: las universalistas del Estado o las particularistas de los respectivos grupos sociales.”*³²

La identificación de estos rasgos en el caso colombiano se traduce, entonces, en las dificultades a las que se enfrenta el Estado tanto en la cuestión del *orden* como en la de la *legitimidad* —constituyéndose en *recurrentes* a lo largo del tiempo. Ahora bien, no obstante este carácter *crónico* que adquiere la *debilidad del Estado colombiano*, esta dificultad para ejercer el monopolio de la coacción se agravó durante los últimos años al compás de la irrupción del narcotráfico como realidad instalada en Colombia.

Actualmente, se estima que el Estado colombiano ejerce apenas un control efectivo del 25 % de su territorio. Al respecto, Waldmann señala que *“en tiempos pasados al Estado no se le disputó el monopolio de la coacción, ni tan constantemente, ni de manera tan provocante como en la actualidad.”*³³

De ahí que Tokatlián argumente que Colombia *“vive en la actualidad una mezcla de Estado fantasma (ejerce la autoridad en algunas áreas limitadas y en otras es inexistente) y Estado anémico (sus energías se consumen combatiendo diversas modalidades de grupos armados).”*³⁴ Las acciones bélicas se desarrollan, fundamentalmente, en ámbitos donde el Estado no puede reclamar el monopolio de la fuerza y donde tampoco es posible *“el dominio sedimentado de las redes regionales y locales de poder que normalmente sirven como base social para la inserción de los partidos tradicionales. Allí, los grupos armados pueden jugar un papel importante en la incipiente implantación de cierto orden o alguna regulación de la convivencia social.”*³⁵

Esta situación resulta vinculada a la manera diferenciada y gradual en la que se fueron insertando las instituciones del Estado en las diversas regiones del país. Respecto de esta presencia diferenciada de las organizaciones estatales, González, Bolívar & Vázquez argumentan que la misma se expresa

³² Waldmann, Peter, El Estado anómico, p. 16.

³³ Waldmann, op. cit., p. 170.

³⁴ Tokatlián, Juan G., *Colombia: un asunto de seguridad regional*, en Las nuevas amenazas a la seguridad, CARI/Escuela Nacional de Inteligencia, Bs. As, 2002, p. 15.

³⁵ González, Bolívar & Vázquez, Violencia política en Colombia, p. 317.

en la coexistencia de instituciones burocráticas e impersonales de justicia y administración pública con poderes '*gamonalicios*' en los ámbitos locales y regionales que continúan adhiriendo a una lógica predominantemente clientelista.³⁶

Más allá de esta cuestión del sistema político diferenciado, las dificultades que enfrenta el Estado colombiano para establecer en su territorio el monopolio de la coacción corren por otros carriles. De hecho, las *zonas en disputa* -que pueden caracterizarse como *estados de guerra*- hacen referencia a la presencia de situaciones o porciones de territorio en las que no sólo el poder institucional deja de ser soberano, sino que además prevalece en sectores amplios de la sociedad *"la voluntad manifiesta de no someterse al orden estatal y de resistirse a su dominio y control, manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo y combatirlo con las armas en mano, así como de agrupar a los sujetos sociales de su entorno en bandos capaces de morir o matar."*³⁷

En definitiva, el proceso de *desgaste* del Estado pone en marcha una situación que *"la justicia privada se tornase un hecho ordinario, que el delito y la criminalidad fuesen altamente rentables y que la noción de autoridad se diluyera. La violencia, entonces, se degradó y se comercializó."*³⁸

En la medida que esta situación actual perdure, el Estado en Colombia parece debatirse entre la condición de fracasado *-failed state-* y la de colapso. Mientras la primera hace referencia a la incapacidad del Estado respecto a la protección de sus individuos y a las comunidades de las fuerzas que amenazan su seguridad existencial³⁹; la segunda categoría se caracteriza por 1) la quiebra de las instituciones políticas establecidas; 2) la pérdida de la legitimidad del Estado para una porción considerable de la población; 3) las contradicciones dentro del aparato armado del Estado y; 4) la ausencia física del Estado en algunas zonas del país.⁴⁰ La diferencia entre una condición y otra va más allá de los límites del propio Estado: se hace presente la interacción con el resto de los actores de la realidad colombiana y la *adaptación a la violencia* por parte de la sociedad en su conjunto. Entra en escena, entonces, la *cultura de la violencia*; cuestión que se analiza en la próxima sección.

LA COTIDIANIDAD DE LA VIOLENCIA

Identificados los actores armados que protagonizan el conflicto interno, a partir de un contexto político-institucional caracterizado por la debilidad

³⁶ González, Bolívar & Vázquez, *op. cit.*, p. 315.

³⁷ Uribe, María Teresa, *Las soberanías en disputa: ¿conflicto de identidades o de derechos?*, en Uribe, María Teresa, *Nación, ciudadano y soberano*, Corporación Región, Medellín, 2001, citado en González, Bolívar & Vázquez, *Violencia política en Colombia...*, p. 198.

³⁸ Tokatlián, Juan G., *Globalización, narcotráfico y violencia*, p. 40.

³⁹ Ver Tokatlián, Juan G., *Colombia: un asunto de seguridad regional*.

⁴⁰ Citado en Tokatlián, Juan G., *Globalización, narcotráfico y violencia*, ps. 67-68.

crónica del Estado colombiano, cabe preguntarse por la *reacción* de la sociedad frente a este complejo escenario que lleva décadas de acumulación de tensiones no resueltas. Una vez más, entonces, la historia se hace presente para avanzar en la comprensión de la situación. Como argumenta Waldmann, *“la historia de los conflictos violentos es tan antigua como la misma Colombia.”*⁴¹

El hecho de que la **cuestión de la violencia** se vuelva **recurrente** para la sociedad colombiana conduce a altos grados de tolerancia, que se confunden con la cotidianidad. A partir de ello, la *convivencia con la violencia* se visualiza como *normal*. Al respecto, cabe mencionar los *rastros* que el periodo de *La Violencia*⁴² tiene en la *memoria colectiva* contribuyendo de múltiples maneras, según Pecaut, a que la *nueva violencia* no sorprenda, que la misma *“aparezca como normal, que ella se difunda también fácilmente, que sus dimensiones y sus jugadas inéditas sean percibidas cuando ya es demasiado tarde.”*⁴³

Producto de esta *representación colectiva* en la que prima la concepción de *una violencia originaria que no cesa de repetirse*,⁴⁴ el *estallido de la violencia* que se produjera en la década del '90 –y que recrudescer las dimensiones del conflicto interno colombiano– no resulta algo ajeno a la realidad social. Sin embargo, las dimensiones que adquiere no pasan desapercibidas para este *imaginario colectivo violento*: *“las redes actuales regidas por los protagonistas de la violencia se diferencian de las anteriores por un uso abierto y sin contención del terror: se trata de un cambio de las proporciones.”*⁴⁵

Más allá de la *debilidad crónica del Estado* –visible en el resquebrajamiento de las regulaciones institucionales y la pérdida de credibilidad del orden legal– el camino hacia la *violencia generalizada* se torna inevitable a partir de que la problemática del narcotráfico se instaura en la realidad colombiana. Al respecto, Thoumi señala ciertos efectos político-sociales que tiene la industria de las drogas ilegales: 1) el cambio de valores, como el creciente materialismo y consumismo; 2) cambios en el comportamiento, tal es el caso del **uso progresivo de la violencia para resolver conflictos**; 3) el aumento de la corrupción, tanto en el gobierno como en el sector privado; 4) el desarrollo de la industria ilegal como catalizador para acelerar la debilidad del Estado, por un lado, y los controles sociales tradicionales, del otro.⁴⁶

⁴¹ Waldmann, Peter, *El Estado anómico*, p. 159.

⁴² Guerra civil entre los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que tuvo lugar entre 1945 y 1958. Del lado conservador adquirió la forma de una *verdadera cruzada religiosa* para instalar un *‘orden católico’* sobre el liberalismo.

⁴³ Pecaut, Daniel, *Presente, pasado y futuro*, p. 904.

⁴⁴ Pecaut, *op. cit.*, p. 919.

⁴⁵ Pecaut, *ibid.*, p. 913.

⁴⁶ Thoumi, Francisco, *El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes*, Planeta/EIPRI, Bogotá, 2002, p. 207.

De esta forma, las múltiples situaciones de violencia en Colombia se entrecruzan, complejizándose a lo largo de las décadas, producto de las dinámicas de interacción entre los distintos actores involucrados en el conflicto. Tal es la acumulación de tensiones y conflictos de la sociedad colombiana que se cristaliza en la actualidad, signada *“por la coexistencia con el narcotráfico y la violencia difusa, a veces indistinguible de la violencia política, que insertan la lucha armada en un nuevo contexto de expansión y refinanciación”* produciendo *“una anarquía generalizada de la vida social y política.”*⁴⁷

Bajo este contexto, en el que se retroalimentan las viejas y nuevas disputas, entra en juego la diferenciación de las *percepciones* de los actores involucrados. Esto manifiesta la heterogeneidad interna de la sociedad colombiana que *“no percibe la situación que atraviesa la población civil en las zonas en conflicto, atrapada entre el fuego cruzado de los adversarios, ni la situación de la población campesina de las regiones de colonización donde se originó la guerrilla y donde se expanden los cultivos de uso ilícito.”*⁴⁸ De esta forma, el mundo urbano –que cuenta con cierta presencia de las instituciones estatales- tiende a percibir a los alzados en armas como delincuentes, al considerar que la motivación ideológica y política del momento fundacional de estos grupos guerrilleros resultó reemplazada por el interés económico –cristalizado en la financiación del narcotráfico, las prácticas extorsivas y el secuestro que afectan, fundamentalmente, a las capas medias y altas de las ciudades. Respecto a los sectores tradicionales de la sociedad colombiana –sectores rurales y poblaciones pequeñas y medianas, cuya integración al país y al Estado resulta vinculada a la clase política tradicional⁴⁹ y sus respectivas clientelas– también sienten socavadas sus bases de organización social y política por los avances de la guerrilla afectando, en consecuencia, su relación con el Estado. Tales avances resultan viables en la medida que la integración clientelista en Colombia es asimétrica, al permitir solamente la articulación de los miembros de la clientela de los partidos tradicionales, dejando afuera a vastos sectores de la población rural, sirviendo de base para la expansión ilimitada de los grupos armados al margen de la ley.⁵⁰

Llevada a su máxima expresión, la forma en que opera esta diferenciación de *percepciones* de los actores, conduce a una *violencia indiscriminada*. A partir de ello, la forma en que opera esta cierta *cultura de la violencia* pone de manifiesto no sólo la incapacidad del Estado colombiano respecto a su función de proveer los mecanismos adecuados para la resolución de conflictos por la vía pacífica, sino además, la desarticulación de la posibilidad

⁴⁷ González, Bolívar & Vázquez, *Violencia política en Colombia...*, p. 23.

⁴⁸ González, Bolívar & Vázquez, *op. cit.*, p. 18.

⁴⁹ La historia política colombiana se caracteriza por la permanente competencia entre los dos partidos tradicionales- el Liberal y el Conservador- interrumpida únicamente por algunas fases de cooperación institucional. Ver Waldmann, Peter, *El Estado anómico...*, p. 170.

⁵⁰ González, Bolívar & Vázquez, *Violencia política en Colombia...*, p. 18.

de reclamo social que pueda efectuarse frente a tal vacío. Sin lugar a dudas, entonces, la *estrategia del terror* resulta funcional...

CONSIDERACIONES FINALES

Tras cuatro décadas de intentos fallidos tendientes a la resolución del conflicto interno por el que atraviesa Colombia, resulta innegable la complejidad del escenario de *violencia cotidiana* que sucumbe al país. Esta realidad, por un lado, pone en tela de juicio tanto la propia voluntad del Estado como su capacidad para ensayar respuestas acordes a la magnitud del conflicto bajo análisis. En este sentido, la dificultad asociada al ejercicio de la presencia estatal efectiva en la totalidad del territorio colombiano adquiere un carácter crónico. Tienen lugar, entonces, ciertos rasgos que señalan el **derrumbe del Estado**: pérdida de legitimidad de las instituciones; ausencia del Estado en amplios territorios del país e; incapacidad de las elites políticas para avanzar en la preeminencia de mecanismos de resolución de conflictos, que no contemplase la presencia de *mecanismos violentos* como interlocutores válidos para la canalización de las tensiones presentes en el escenario político-social del país.

Por otro lado, manifiesta una marcada tendencia hacia una **cultura de la violencia** por parte de vastos sectores de la sociedad colombiana. Es en este sentido que puede argumentarse que *“la violencia ha dejado de ser algo externo a esta sociedad, se ha integrado en sus estructuras y ha pasado a ser una componente de su orden social.”*⁵¹

En la identificación de estos *disparadores*, a partir de los cuales abordar el conflicto colombiano *‘puertas adentro’*, cierta **simbiosis entre lo histórico y lo reciente** se hace presente. Las *viejas y nuevas disputas* se entrecruzan, así, en un contexto signado por la *debilidad crónica del Estado colombiano*, que no escapa a su articulación con el narcotráfico como realidad instalada en el país, fundamentalmente, a partir de la década del '90.

De esta forma, las tensiones y conflictos de la sociedad colombiana –lejos de su resolución– se retroalimentan, articulando un *juego de interrelaciones conflictivas* entre las distintas poblaciones y territorios del país. Producto, entonces, de esta *convivencia violenta* de los actores político-sociales presente en la sociedad colombiana –en su doble dinámica de lo histórico y lo reciente– resulta indiscutida la instauración de la violencia como *un modo de funcionamiento de la sociedad*.

Ahora bien, no obstante los considerables altos grados de tolerancia que puede presentar la sociedad colombiana frente a las *realidades violentas* a las que resultó –y resulta– inmersa, los costos sociales del despliegue de esta *guerra sucia* no constituyen una cuestión menor. La adhesión a la *estrategia del terror* a la que recurren los actores armados deja en vilo a

⁵¹ Waldmann, Peter, El estado anómico, p. 169.

vastos sectores de la población civil, que resulta *presa* de la particular interacción estratégica que se origina entre aquellos participantes. De hecho, la **profunda crisis humanitaria** que esta realidad trae aparejada –visible en las numerosas violaciones contra los derechos humanos y acciones contra la población civil, que conducen a considerables movimientos de desplazamientos forzosos y de refugiados– resulta sin precedentes en la historia del país y en la de sus vecinos.

Por lo tanto, la comprensión de este **complejo escenario** que presenta el conflicto interno colombiano, a partir de la identificación de sus *causas*, es fundamental para avanzar en el ensayo de respuestas acordes a la magnitud del mismo. La atención de tales *causas* resulta pertinente en la medida que constituye el punto de partida para abordar el tratamiento de las **consecuencias** que acarrea el conflicto bajo consideración. *Consecuencias* que no pasan desapercibidas en un contexto en el que la internacionalización del conflicto, lejos de resultar potencial, puede moldear –cada vez más– las condiciones de seguridad más allá del territorio colombiano. En este sentido, comprender el conflicto colombiano '**puertas adentro**' resulta crucial ya que –a partir de la consideración de sus múltiples dimensiones– opera como el puntapié inicial para la extensión del análisis en cuanto a las repercusiones que el mismo pueda tener '**puertas afuera**.'

BIBLIOGRAFÍA

- Attiná, Fulvio. **El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales**. Barcelona: Paidós, 2001.
- González, Fernán E., Bolívar, Ingrid J. & Vázquez, Teófilo. **Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado**. Colombia: Cinep, 2003.
- Hirst, Mónica. **Seguridad regional en las Américas**. Bs. As.: Mimeo, 2003.
- Kaldor, Mary. **Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global**. Barcelona: Tusquets Editores, 2001.
- Pecaut, Daniel. **Guerra contra la sociedad**. Bogotá: Espasa, 2001.
- Pecaut, Daniel. **Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia**. Bs. As.: Desarrollo Económico, vol. 36, n° 144, enero-marzo 1997.
- Snyder, Jack & Jervis, Robert, **Civil war and the security dilemma**, en Walter, Barbara & Snyder, Jack (eds.), **Civil war, insecurity and intervention**. New York: Columbia University Press, 1999.

- Tokatlián, Juan G. ***Colombia: un asunto de seguridad regional***, en **Las nuevas amenazas a la seguridad**. Bs. As.: CARI/Escuela Nacional de Inteligencia, 2002.
- Tokatlián, Juan G. **Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia**. Bs. As.: Grupo Editorial Norma, 2000.
- Thoumi, Francisco. **El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes**. Bogotá: Planeta/EIPRI, 2002.
- Vargas Meza, Ricardo. **Drogas, máscara y juego. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia**. Bogotá: TM Editores, 1999.
- Waldmann, Peter. **El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina**. Venezuela: Nueva Sociedad, 2003.